

## ARGENTINA: UNA COOPERATIVA DE TRABAJADORES SUBSTITUYE A ENRON

POR GUILLERMO AMOREBIETA

La década de los 90 provocó la mayor venta de activos del Estado argentino en toda su historia y, junto con la entrega de los servicios públicos en concesión a empresas del país y grupos económicos multinacionales, se convirtió en el triste ejemplo del “éxito” en materia de políticas neoliberales para los países en desarrollo.

Desde 1990, cuando el sector más conservador de la política argentina asumió la conducción económica del gobierno central, se produjo una venta sistemática de las empresas estatales, desde la industria metalúrgica hasta el sector petrolero, incluido el transporte aéreo, marítimo y terrestre, las comunicaciones, el sistema de seguros de retiro y de bienes, los aeropuertos, etc. Se llegó incluso al extremo de concesionar el espacio radioeléctrico junto con la electricidad, el saneamiento, el gas y todos los servicios complementarios que cualquier nación presta a sus ciudadanos.

La provincia de Buenos Aires (10 millones de habitantes repartidos en 74 ciudades con 48 municipalidades), debido a la resistencia de algunos sindicatos y contadas ONGs de incipiente creación, mantuvo la mayor parte de los servicios públicos estatales dentro de su órbita pero sufrió una presión constante del gobierno central, mediante el ahogo financiero, para que se desprendiera de las empresas prestatarias de servicios públicos. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial requerían en forma persistente que se desprendiera de los activos vinculados a prestaciones urbanas como condición para acceder a financiación en diversas áreas.

El Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires propuso un proyecto de ley denominado OSBASA y logró que el Senado de la provincia —no así la Cámara de Diputados provincial— lo aprobara. En él se establecía una administración pública de los servicios de sanea-

miento básico en la provincia, con la participación de los trabajadores en la conducción administrativa y operativa de la empresa. Este proyecto contemplaba la obligación de todas las administraciones de la provincia de salvaguardar los recursos hídricos, universalizar las prestaciones básicas, garantizar el tratamiento de desechos y obligar a los municipios y cooperativas operadoras a similares condiciones.

Lamentablemente, las fuertes presiones políticas provenientes de los sectores empresariales nacionales y extranjeros, de los organismos multilaterales de crédito y de algunos consultores con fuerte vínculo empresarial provocaron que los diputados de la legislatura provincial terminaran archivando el proyecto y preparando el terreno para la futura privatización de los servicios sanitarios.

En el año 1999, y como consecuencia de las presiones políticas ejercidas por diversos sectores económicos de los Estados Unidos, que hasta ese momento habían quedado excluidos de la distribución del capital social argentino, las últimas empresas estatales de propiedad de las provincias fueron entregadas para su explotación bajo condiciones de mayor regulación por la lenta pero continua toma de conciencia por parte de la sociedad civil.

En la provincia de Buenos Aires (principal contribuyente al PBI nacional y con casi un tercio de la población del país), las empresas distribuidoras de servicios públicos fueron blanco de la ambición voraz de los capitales de Houston. Uno de los motivos importantes por los que Enron, Houston Corporation y AES fueron receptoras de los servicios de agua y de energía fue la participación de Marvin Bush, hermano del recientemente reelecto presidente de los Estados Unidos y conocido influyente para las empresas texanas.

## AGUA COSTOSA

Buenos Aires contaba con la segunda empresa estatal operadora del servicio del agua en todo el país, llamada OSBA, que además tenía como función social la distribución en las áreas más pobres y los sectores marginales de los conglomerados urbanos bonaerenses, el control de los vertidos industriales y el ejercicio legal del poder de policía en materia de saneamiento hídrico.

Como en el caso de las restantes concesiones del país en el sector del agua, la adjudicataria Enron —a través de su filial Azurix Corp. y su representación en la Argentina, Azurix Buenos Aires, S.A.—, se hizo cargo de las prestaciones en condiciones ventajosas desde el punto de vista contractual pero con un marco social mucho más complejo: gran empobrecimiento de la población, casi el 20% de desocupación, un sistema monetario a punto de estallar por el mantenimiento de la convertibilidad, el desgaste político del gobierno y las primeras reacciones sociales ante la situación general y la mala calidad de los servicios en particular.

El pago de un “valor llave” de casi 500 millones de dólares estadounidenses (que representó casi tres veces la oferta del consorcio que llegó en segundo lugar), puso de relieve la improvisación técnica y la premura por hacerse con nuevas empresas que permitieran el aumento de las cotizaciones de Enron en Wall Street. Azurix esperaba que los gobiernos locales permitieran eludir las obligaciones contractuales para hacer de este nuevo negocio un mecanismo rentable de corto plazo, tal como lo habían hecho durante casi diez años las francesas Suez y Vivendi en la ciudad de Buenos Aires y varias provincias del interior del país.

La concesión abarcaba más de 70 ciudades con agua y cloacas, 47 plantas de tratamiento de líquidos cloacales, 20 plantas potabilizadoras, 470 perforaciones profundas para agua potable, casi 10.000 km de redes de distribución de agua y 7.200 km de redes de desagües. De los 2.000 trabajadores originales, apenas 1.100 pasaron a la concesión otorgada a Enron.

La empresa constituida se denominó Azurix Buenos Aires S.A., capitalizada por Azurix Corporation, con sede en Houston, y otra firma creada al efecto, Azurix Argentina. El capital social declarado ascendía a 85.000 pesos argentinos (con una paridad de 1 dólar = 1 peso), lo que apenas representaba el valor de una pequeña propiedad inmobiliaria en cualquier lugar del país.

Para actuar como operador responsable, tal como lo requería el contrato incluido en el pliego de la licitación, utilizaron la figura de Wessex Water, una pequeña compañía de Inglaterra que la Enron había comprado para ese fin y, además, crearon la Wessex Technical, que se encargaba de la consultoría técnica pero que nunca tuvo participación activa en la gestión empresarial de la concesión, aunque se presume que constituía parte del sistema de empresas “fantasmas” creadas por Enron para derivar dinero a

los paraísos fiscales mediante maniobras consideradas ilegales por la justicia estadounidense.

Durante el primer año de gestión de Azurix, se comprobó que, más allá de realizar un “maquillaje” a las instalaciones de la empresa recibida, buscaba la forma más rápida de recuperar el pago efectuado al Estado para hacerse con las prestaciones, sin realizar las inversiones más importantes y urgentes que el servicio requería.

El descuido y desinterés de Enron provocaron graves sucesos en el servicio, tanto en la producción y distribución de agua como en la recolección y tratamiento de los desagües cloacales: contaminación de redes de agua, desperfectos importantes en plantas potabilizadoras, paralización de plantas de tratamiento de líquidos cloacales, desinversión en equipamiento y tecnología, tercerización de tareas importantes para el servicio, etc. Todo esto provocó el descontento social y el reclamo de varias organizaciones de usuarios y consumidores que, a su vez, presionaron a los intendentes municipales (alcaldes) de importantes ciudades afectadas por el mal desempeño de Azurix Buenos Aires, lo que puso entre la espada y la pared al gobierno de la provincia y lo llevó, de forma inevitable, a sancionar repetidamente al concesionario y a exigirle la rectificación de su política de inversiones y la puesta en vigencia de un programa adecuado para rescatar la calidad y continuidad de las prestaciones.

Los trabajadores tuvimos que presionar al gobierno para lograr, luego de varios meses de negociaciones, la puesta en vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo y las comisiones de aplicación del mismo, con el agravante de que, debido a que contaba con una planta de personal muy ajustada para el funcionamiento operativo, recurrió a la tercerización como metodología permanente para llevar a cabo trabajos regulares, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores de la empresa y la baja calidad de los servicios que recibía el usuario.

## LA SOBERBIA EMPRESARIAL

Cuando los gerentes de Azurix comprobaron que el gobierno no podía controlar el descontento de los usuarios por las malas condiciones del servicio en varias ciudades del interior de la provincia, comen-

zaron a reemplazar a los profesionales argentinos por otros que “importaron” de forma totalmente improvisada desde Inglaterra, Australia y los Estados Unidos, con el objeto de buscar soluciones de bajo costo a los problemas que se comenzaban a complicar día tras día.

Sin manejar el idioma, sin conocimiento de la tecnología existente, con bajo presupuesto para obras básicas y con la presión de los usuarios que demandaban soluciones urgentes a los problemas del servicio en varias ciudades importantes de la concesión, estalló la crisis entre las autoridades del Estado y la empresa. El Organismo Regulador impuso fuertes multas y otras sanciones a la concesionaria. No habían pasado dos años de contrato y después, para colmo, se sumó la bancarrota de Enron, su matriz en los Estados Unidos, que terminó de poner en retirada a los últimos gerentes estadounidenses y el consecuente abandono de la empresa con los conocidos graves incumplimientos.

#### EL GOBIERNO NO SABE QUÉ HACER

Llegaba el mes de febrero de 2002, y el gobierno de la provincia no tenía ni el personal técnico ni el equipo de gerencia necesario para retomar las prestaciones desde la órbita estatal, lo que (bajo la presión del plazo que se extinguía para hacerse cargo del servicio y los problemas que acuciaban a los usuarios) llevó inevitablemente a convocar al Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires a negociaciones urgentes que permitieran garantizar la calidad, cantidad y continuidad del suministro a los casi tres millones de habitantes abastecidos por la concesión.

Se planteó entonces un proyecto global que involucrara a los actores sociales más allá de los condicionamientos políticos que las circunstancias podían imponer al gobierno y que se resumía en una empresa del Estado con participación accionaria de los trabajadores de la misma, con el reconocimiento por parte del propio organismo regulador (llamado ORAB en aquel momento y hoy denominado OCABA). De este modo, los trabajadores del saneamiento hídrico, organizados a través de una empresa propia en sociedad con el Sindicato, se erigían en operadores del servicio, eliminando las condiciones impuestas por el Banco Mundial en todos los procesos de concesión referidos a la experien-

cia internacional para constituirse en tal condición contractual.

Se incorporó a los usuarios por intermedio de las organizaciones representativas, tanto en el organismo regulador (ex ORAB) como en la gerencia de la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), y se estableció un compromiso para que los honorarios correspondientes a la operación del servicio se convirtieran en nuevas acciones para los trabajadores a partir del momento en que la empresa equilibrara sus cuentas y superara la emergencia sanitaria que provocó la mala gestión de Azurix Buenos Aires–Enron.

Los propios trabajadores emplean su conocimiento y experiencia para llevar a cabo la tarea de captación, potabilización y distribución del servicio de agua corriente, y el escurrimiento y depuración de las aguas residuales, con control cruzado del Organismo Regulador en lo técnico y operativo por un lado, y del Ministerio de Infraestructura–Obras y Servicios Públicos por el otro, tanto en la gestión comercial como en la calidad de las prestaciones. Las organizaciones de usuarios reconocidas (unas doce en el área abastecida por ABSA) tienen por su parte independencia para, además de participar en la gestión y el control, acceder al Defensor del Pueblo y a los organismos municipales representativos de usuarios y consumidores, lo que permite una presencia constante en cada acontecimiento del servicio.

Para establecer un sistema de operación del servicio en una empresa de tal magnitud, el Sindicato recurrió a la conformación de una Sociedad Anónima integrada por la organización y los trabajadores de la empresa ABSA. Ésta detenta el 10% del capital accionario de Aguas Bonaerenses S.A., la prestataria estatal de servicios, y está previsto que esta participación accionaria se incremente en el futuro.

Desde el inicio de la actividad operativa, el Sindicato no quiso la gestión contable y administrativa de ABSA, y concentró su actividad exclusivamente en la operación técnica del servicio, la formulación de políticas destinadas a recomponer las principales carencias en materia de agua y alcantarillado, mejor y más justo empleo de los recursos humanos, promoción y calificación de los trabajadores técnicos y profesionales, participación de los ciudadanos mediante talleres destinados a dar a conocer las actividades técnicas y operativas de la empresa, políticas de obras y expansión del servicio, tecnificación de los sistemas de control y administración, etc.

Mediante la utilización de recursos propios de ABSA y el aporte de

capital del Estado provincial, se suplió la falta de crédito para financiar las principales obras y revertir la problemática más acuciante heredada del concesionario anterior. Para ello, la operadora de los trabajadores (llamada 5 de septiembre S.A.) desarrolló una amplia política de consultas con las autoridades comunales, con las organizaciones de usuarios y consumidores, y revisó los archivos históricos de la antigua empresa OSBA para llegar a las conclusiones teóricas que permitieran un desarrollo técnico eficaz en el sector de planeamiento y obras. Esto implicó la formulación de un plan de trabajo que posibilitara superar las emergencias más graves y acuciantes, tanto desde el punto de vista del abastecimiento de agua como de los remedios necesarios para bajar drásticamente los niveles de contaminación por falta de tratamiento de las aguas residuales.

En materia de agua potable, se está realizando el reemplazo de más de 100.000 metros de los conductos de distribución más antiguos en operación, que en algunos casos tienen más de 70 años de uso, utilizando modernas técnicas de entubamiento inteligente mediante el contrato con pequeñas y medianas empresas de capital nacional.

Otra prioridad fue la construcción de nuevos acueductos en las principales urbes, lo que permitió la expansión del servicio a zonas populosas y con riesgo sanitario, además de fortalecer los niveles de presión y caudal en áreas críticas de la periferia de varias ciudades.

La continuación de obras interrumpidas por la parálisis de Azurix Buenos Aires se dirigió especialmente a reactivar plantas de tratamiento de líquidos cloacales y reacondicionar sistemas de depuración que fueron puestos fuera de servicio por falta de inversiones, lo que garantizó una reducción de los niveles de contaminación en las fuentes hídricas superficiales.

En 1999, año en que tuvo lugar la privatización, la provincia de Buenos Aires contaba con un índice de abastecimiento de agua del 74%, y el 47% de la población urbana disponía de acceso a saneamiento. En 2002, tras la retirada de Azurix y el establecimiento de ABSA, la prestación de agua había disminuido al 68% debido al crecimiento demográfico y a la falta de inversiones. El 43% de la población carecía de saneamiento. Actualmente, el 71% de la población tiene agua potable y el 45% cuenta con saneamiento en sus casas. Es importante destacar que, hasta ahora, todas las inversiones se han realizado con financiación

procedente del presupuesto de la empresa y del gobierno provincial. Recientemente, el gobernador negoció un préstamo con el Banco Mundial que será de gran utilidad para la ampliación de los servicios. Nos hemos visto en la necesidad de renovar las redes hídricas porque Azurix no hizo nada en este sentido, y las fugas de agua representaban hasta el 40% del total de agua potable producida. Así pues, se han perdido millones de litros debido a la edad de los tubos (más de 60 años). Se han reemplazado más de 110.000 metros de tubos y se ha recuperado la presión del agua estipulada en el contrato en un 30% del territorio. Azurix también había abandonado la mitad de las plantas de tratamiento de aguas residuales, lo cual se tradujo en un aumento notable de la contaminación de los ríos. Ahora, un 30% más de esas plantas paralizadas presentan un funcionamiento óptimo. Además, se están investigando las obras de Azurix ante la sospecha de fraude. En algunos casos, Azurix afirmó haber realizado unas obras que no existen en realidad y, en otros, Azurix se limitó a efectuar un pequeño mantenimiento de acueductos que se deberían haber renovado. Esta investigación está relacionada con una solicitud de indemnización presentada por Azurix/Enron en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra el Estado nacional y la provincia de Buenos Aires.

Los próximos pasos que debemos llevar a cabo están dirigidos a obtener plena autonomía del poder político mediante la incorporación de los usuarios como accionistas representados por las asociaciones representativas y la inclusión de otros sectores productivos de la región donde ABSA presta sus servicios para garantizar un nivel de decisiones democráticas más amplio, el uso racional de los recursos económicos y financieros, la puesta en marcha de un sistema de prioridades en la expansión del servicio con contenido social y el compromiso del Estado en la financiación de las grandes obras que una importante región necesita para acompañar el crecimiento demográfico y el desarrollo productivo.

*Guillermo Amorebieta es dirigente del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires.*